

## 19. Transición democrática, organizaciones de traficantes y lucha por la hegemonía

*Luis Astorga*<sup>108</sup>

Durante varias décadas, desde los inicios de las leyes contra la marihuana y la amapola en los años veinte del siglo pasado, la violencia de los traficantes fue moderada. Asimismo, los enfrentamientos con los representantes de la ley eran mínimos y por lo general, las muertes sucedían dentro del propio campo del tráfico de drogas ilegales. A finales de los años sesenta se empezó a observar un crecimiento sostenido de la curva de violencia, que, sin embargo, no llegó a poner en riesgo la capacidad del Estado para contener a quienes la estaban ejerciendo. El sistema de partido de Estado que se creó después de la revolución mexicana construyó instituciones de seguridad con atribuciones extralegales que le permitieron aplicar dos acciones de manera simultánea: proteger y contener a los traficantes.

El negocio ilegal nació subordinado al poder político y éste mantuvo esa capacidad mientras duró el Estado autoritario. La correlación de fuerzas y la relación de supeditación, al igual que la violencia y el mercado interno de las drogas ilegales, se modificaron en la misma medida en que se debilitaba y fracturaba el sistema de partido de Estado, en los años noventa. Mientras el país transitaba hacia la democracia, el mercado mundial de drogas ilegales crecía. A su vez, la capacidad económica y de corrupción de los traficantes aumentó, así como el armamento de mayor calibre y poder de destrucción.

El tema de la seguridad y los retos de las poderosas organizaciones de traficantes no fueron prioritarios para la clase política en los primeros años de la transición. Los partidos políticos estaban más interesados en las posibilidades que se les presentaban para ganar más y mejores posiciones de poder. Por competir se olvidaron de construir las instituciones de seguridad y procuración de justicia acordes con la nueva época, como si la transformación y consolidación de éstas se fuera a dar de manera automática. La rivalidad entre partidos y la alternancia en el poder impidieron la creación de una política de seguridad de Estado. El resultado fue una fragmentación y debilitamiento del mismo para enfrentar los desafíos de los grupos criminales, quienes pasaron de la supeditación política a la confrontación directa y a la disputa por el control de instituciones de seguridad. Algunas organizaciones agregaron a la estrategia la expansión territorial de sus actividades, el intento de control territorial, y la diversificación de la renta criminal al incorporar, por ejemplo, la extorsión a negocios legales e ilegales, el secuestro, el tráfico de personas y la piratería.

<sup>108</sup> Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM.

La violencia desbordada de los últimos años en México ha sido generada principalmente por dos grandes coaliciones de traficantes originarias de dos estados de la federación: Sinaloa y Tamaulipas, con socios en distintas partes del país. Ambas surgieron y se desarrollaron cuando el sistema de partido de Estado dependía del campo político. La primera es más antigua y reinó sin competencia hasta finales de los años ochenta. La segunda, en cambio, es más reciente y logró colocarse por encima de sus competidores del noroeste en sólo un sexenio, la administración Salinas (1988-1994).

Recapitulando, el estado de Sinaloa era ya en los años cuarenta el principal productor de adormidera y goma de opio en México. Los traficantes locales eran conocidos como los “gomeros”. Más adelante, en los cincuenta, la prensa local calificó a Culiacán como un “Chicago con gánsters de huarache”. Durante los años setenta y hasta su captura, en 1989, Miguel Ángel Félix Gallardo fue considerado el líder más importante de su época. Se desempeñó como policía y guardaespaldas de la familia del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis (1963-1968).

Según la DEA, Félix Gallardo era socio del químico hondureño Ramón Matta Ballesteros, principal enlace con los colombianos para el tráfico de cocaína. Matta había trabajado anteriormente con el traficante de cocaína más importante que operaba en México: el cubano Alberto Sicilia Falcón, capturado en 1975 por las autoridades federales mexicanas. Así, el negocio de la cocaína en México pasó a manos de los traficantes mexicanos, particularmente de los sinaloenses, bajo el liderazgo de Félix Gallardo. Esta coalición estaba conformada por otros personajes que darían mucho de que hablar tiempo después ya que desarrollaron sus propias organizaciones. Del municipio de Badiraguato provienen Juan José Esparragoza Moreno, Ernesto Fonseca, Rafael Caro Quintero, y Joaquín Guzmán Loera; Héctor Palma del municipio de Mocorito, Amado Carrillo de Guamuchilito, poblado a unos 40 km de Culiacán; los hermanos Arellano Félix surgidos de la clase media de la capital sinaloense. Con la excepción de estos últimos, todos los demás son originarios de zonas rurales o semirurales. Los sinaloenses eran los principales traficantes de heroína, marihuana y cocaína, logrando mantener la hegemonía en ese campo durante varias décadas.

En 1985, el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, cuya autoría intelectual fue atribuida a Félix Gallardo y socios, tuvo repercusiones graves para la coalición sinaloense, sus redes de protección en la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y la Policía Judicial Federal (PJF). Como consecuencia, fueron capturados Ernesto Fonseca y Rafael Caro Quintero. Además, el gobierno de Miguel de la Madrid, luego de fuertes presiones del gobierno estadounidense, disolvió la Dirección Federal de Seguridad, ese mismo año. Parte de las atribuciones de ésta se concentraron en la PJJF pero ya sin la fuerza que tuvo la DFS durante cuatro décadas. Nunca más volvió a tener el sistema de partido de Estado la capacidad de control político y policiaco sobre el campo del tráfico de drogas y sus agentes. Este fue el principio de una época que

muestra una creciente autonomía del tráfico de drogas y las corporaciones policíacas respecto del poder político.

Antes de la captura de Félix Gallardo, la coalición que lideraba tuvo su primera escisión importante: la mancuerna Héctor Palma- Joaquín Guzmán. Otra escisión fue la de los hermanos Arellano, quienes se trasladaron a Mazatlán, luego a Guadalajara y finalmente a Tijuana. El grupo que consolidó la alianza más fuerte fue el conformado por Palma, Guzmán, Carrillo, Zambada, y Esparragoza. La tercera ruptura sucedió a partir de los enfrentamientos entre grupos, lo cual provocó el asesinato de Rodolfo Carrillo, cometido el 11 de septiembre de 2004, en Culiacán.

En enero de 2008, Alfredo Beltrán Leyva fue capturado, en Culiacán. Ese mismo año, en mayo, fueron asesinados un hijo, Édgar, y un sobrino de Joaquín Guzmán, además, el hijo de una presunta lavadora de dinero de la organización del mismo. Tras estos acontecimientos, corrieron rumores de diferencias entre el grupo Beltrán y Guzmán. De acuerdo con esto, los primeros habían pactado con los “Zetas”, en 2007, sin avisar a los demás miembros de la coalición. Por otro lado, Guzmán había proporcionado información para la captura de Alfredo Beltrán y en represalia sus hermanos habían eliminado a los familiares de éste. A partir de ello se dio la cuarta gran escisión de la coalición sinaloense y la conformación de presuntas nuevas alianzas: Carrillo-Beltrán-Zetas. Los altos niveles de violencia desde 2008 tienen que ver con la reconfiguración de las coaliciones y las disputas por lograr la hegemonía en el campo del tráfico de drogas.

Por otra parte, durante la administración del presidente Carlos Salinas, la organización de traficantes de Tamaulipas encabezada por Juan García Ábrego, socio de los traficantes de Cali, se colocó por encima de los sinaloenses. Su consolidación fue meteórica y atípica ya que los tamaulipecos nunca habían aparecido como personajes importantes en la historia del tráfico de drogas en México. La organización de Tamaulipas, también conocida como del Golfo, recibió el apoyo del comandante de la PJE, Guillermo González Calderoni. García Ábrego fue capturado en enero de 1996, durante la administración de Ernesto Zedillo, y extraditado inmediatamente a Estados Unidos donde fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas. Se argumentó que había sido una deportación ya que también tenía un acta de nacimiento estadounidense, posterior a la mexicana, por lo que sus abogados hicieron gestiones para que regresara a México alegando que fue desterrado. Como consecuencia, los traficantes de Tamaulipas comenzaron a disputarse el liderazgo. En 1998, Osiel Cárdenas y Salvador Gómez, miembros de la organización, fueron detenidos en Matamoros y enviados al D.F. Sin embargo, lograron escapar y regresar a Tamaulipas. Gómez fue asesinado ese mismo año y Cárdenas asumió el liderazgo de la organización. No obstante, después de un enfrentamiento a balazos con militares, en las calles de Matamoros, en marzo de 2003, Cárdenas fue capturado.

Osiel Cárdenas se distinguió de otros líderes del tráfico de drogas por varias razones: introdujo el paramilitarismo en el campo del tráfico de drogas al cooptar a un grupo de militares de élite, y escaló el nivel de las confrontaciones con las instituciones del Estado. Además, fue proclive a las acciones clientelistas de amplia cobertura mediática, como el regalo de juguetes a los niños o comida a damnificados, se interesó más en los medios de comunicación que sus homólogos y los utilizó cuando lo creyó conveniente, preocupándole su imagen dentro los mismos. Era como si coexistieran en él, el empresario de la ilegalidad, el guerrero y el populista.

Según la PGR, en 1996, ingresó a las Bases de Intercepción Terrestre de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS) un grupo de militares conocidos posteriormente como los “Zetas”, los cuales dependían de la Coordinación de Operaciones de dicha institución, dirigida por militares. A finales de 1999, fueron enviados a Tamaulipas, aunque a principios de 2000 desertaron varios de ellos. El titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, afirmó que el grupo de los “Zetas” estaba conformado por alrededor de 40 ex militares, entre tenientes, subtenientes y ex GAFES quienes pasaron a formar parte de la organización de Osiel Cárdenas

En 2005, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) dijo que de un grupo original de alrededor de 50 Zetas, en otras ocasiones habló de 30 o 40, sólo quedaban como 12 y que la disminución de sus efectivos y capacidades los habían inclinado a la contratación de 30 kaibiles para entrenar más civiles de la organización de traficantes de Tamaulipas. El liderazgo de la misma lo estarían disputando el líder de los “Zetas”, el “Lazca” y el hermano de Osiel Cárdenas, “Tony Tormenta”. Según el titular de la SIEDO, los exGAFES se habían rebelado a la autoridad de Cárdenas y habían cerrado filas con su líder de origen militar.

El FBI afirma que los “Zetas” en Estados Unidos han contratado los servicios de miembros de pandillas como la Mexican Mafia, el Texas Syndicate, la MS-13 y Los Hermanos Pistoleros Latinos. Los estadounidenses señalan que han contratado a exkaibiles y miembros de la Mara Salvatrucha, y que tienen campos de entrenamiento en Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán. Otro grupo paramilitar, aliado primero y luego rival de los “Zetas”, es el de la llamada “Familia”. Este surgió en Michoacán y ha extendido su influencia a otras partes, como Guanajuato, Oaxaca y el Estado de México. Se formó en 2004, presuntamente por exmiembros de los “Zetas” y comenzó a disputarle a la organización de los hermanos Valencia el control de una parte de la llamada Tierra Caliente.

Las acciones del gobierno federal más las disputas internas en las organizaciones han provocado escisiones en las coaliciones de traficantes, pero no una fragmentación, es decir, la reducción a partes pequeñas sin fuerza suficiente para retar al Estado. De hecho, se han conformado nuevas coaliciones. La que conjugaría quizás la mayor

capacidad de generar violencia es la alianza entre los hermanos Beltrán Leyva, los Carrillo y los “Zetas”. De consolidarse esa coalición estaríamos ante el surgimiento del más poderoso aparato paramilitar en el campo del tráfico de drogas. Sin una visión de Estado de las distintas fuerzas políticas para construir y consolidar las instituciones de seguridad y procuración de justicia que permita contrarrestar los embates de esos grupos, lo más probable es que los traficantes no se conformen con tener solamente presencia territorial y el control de quienes ocupan posiciones de poder sino que pretendan controlar territorio e influir en las decisiones políticas, al estilo de la mafia italiana o los paramilitares en Colombia.

## 20. Narcotráfico y política

*Carlos Flores Pérez*<sup>109</sup>

El tráfico de drogas es una de las actividades más lucrativas de la delincuencia organizada transnacional. La construcción de una empresa criminal globalizada, dada la diferente ubicación geográfica de muchas de las principales zonas de producción de drogas psicoactivas y de los mercados más atractivos para su distribución, implica la existencia de una amplia red logística que atraviesa diversos países. Los especialistas que analizan el crimen organizado coinciden en que la corrupción juega un papel indispensable en la existencia del mismo. El encubrimiento de actores públicos, las actividades ilegales y el conjunto de individuos que las desarrollan pueden sobrevivir en un ambiente en el que el Estado implante mecanismos de proscripción sobre unos y otros.

El grado en que ese encubrimiento se encuentra presente en un referente geográfico concreto no es igual y, en buena medida, está determinado por diversos aspectos, entre los cuales están las características estructurales específicas del Estado y el régimen político, pues ejercen un papel especialmente importante. En Estados estructuralmente débiles, los problemas asociados a la delincuencia organizada se exacerban

---

<sup>109</sup> Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).